

Publicamos este artículo del profesor Gandásegui, director de la prestigiada revista *Tareas* y profesor de sociología en la Universidad de Panamá, que nos permite tener, en pocas líneas, un panorama que bien podría ser el cuadro de muchos países latinoamericanos.

PANAMÁ TIENE MÁS “BILLONARIOS” EN 2012

marco a. gandásegui, hijo

El año 2012 en Panamá fue extremadamente convulsionado, tanto política como económicamente. La política oficial de gobierno se redujo a crear oportunidades de negocios para las trasnacionales que especulan con las riquezas panameñas: el Canal de Panamá y todas las actividades de transporte marítimo, los negocios inmobiliarios, el turismo y otros asuntos afines. El crecimiento de las ganancias bancarias es un buen indicador de la política de despojo que aplica el gobierno en detrimento de las familias de los trabajadores, de la gente del campo, de los pequeños y medianos empresarios y, sobre todo, de la juventud, de las mujeres y de las etnias discriminadas.

Los ideólogos de los gobernantes, hasta hace poco, decían cínicamente que mientras más rápido los millonarios se hacían billonarios, las riquezas comenzarían a “gotear” hacia abajo y favorecer a los pobres. En los últimos diez años la riqueza de Panamá, utilizando el indicador convencional del producto interno bruto (PIB), se multiplicó tres veces, pasando de 10 000 millones a más de 30 000 millones de dólares. Sin embargo, la pobreza sigue golpeando a cerca de la mitad de la población, y el empleo informal sigue siendo la forma de trabajo más común en el país.

La población panameña tiene cada vez menos oportunidades para educarse. Las tasas de deserción tienden a subir cada año.

Al mismo tiempo, los servicios de salud y de seguridad social, así como los servicios de agua potable, la recolección de basura, el saneamiento ambiental y otros servicios básicos han colapsado sin soluciones a la vista.

La corrupción —que antes se disimulaba— es, en la actualidad, una práctica abierta. La Contraloría, la Procuraduría y otras instancias de control no actúan para detener el caos en el manejo de los fondos públicos. ¿Qué hace el gobierno con los 1000 millones de dólares que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) traspasa anualmente al gobierno? El gobierno anunció que tenía una lista de proyectos que entre 2010 y 2014 demandarían inversiones por 13 000 millones de dólares. ¿Dónde están los informes sobre esas inversiones? Mientras tanto, el presidente de la Asamblea de Diputados gasta arbitrariamente 600 000 dólares del erario en la compra de 30 000 jamones para regalarlos a su base electoral (que tiene menos de 10 000 familias). La Contraloría ni la Procuraduría creen prudente realizar una investigación.

El crimen aumenta de la mano de la militarización. El gobierno movilizó tropas para reprimir las protestas populares contra el despojo de tierras en Chiriquí y en Colón, con un saldo de cinco muertes. La provincia del Darién y la comarca de Kuna Yala han sido convertidas en zonas de acceso limitado. Los estamentos de seguridad

panameños, entrenados y financiados por los Estados Unidos, siguen realizando sus experimentos de armas y de guerra psicológica. La política equivocada de “guerra contra las drogas”, impulsada por la embajada de los Estados Unidos, se ha convertido en una campaña para transformar a los jóvenes panameños —especialmente los más humildes— en consumidores de estupefacientes.

El incremento del empleo informal en las ciudades tiene su complemento en las áreas rurales, donde se expulsa a los campesinos y a los indígenas de sus tierras por intereses especulativos turísticos, mineros e hidroeléctricos.

¿Qué es lo que más le disgustó a los panameños en 2012?

En primer lugar, el alto costo de la vida. El incremento de los precios supera los ingresos informales de los trabajadores. Según las estadísticas, la canasta básica (de alimentos y otras necesidades) aumentó en forma significativa en 2012. Los salarios de los trabajadores se estancaron.

En segundo lugar, los panameños se sienten cada vez más inseguros en la calle, en sus comunidades y en sus hogares. La militarización —denominada “seguridad nacional”—, que en su momento engañó a muchos, hizo creer que iba a terminar con la violencia. Sin embargo, ha hecho lo contrario. Un indicador fehaciente es el aumento en el número de homicidios durante 2012.

En tercer lugar, la corrupción ha convertido a los empleados públicos en blancos para quienes quieren hacer negocios ilegales. Desde las posiciones más altas hasta las más bajas, “todos tienen un precio”, declaró un encumbrado “servidor público”.

¿Qué quieren los panameños para 2013?

Primero.— un plan económico que ofrezca empleo, especialmente para los jóvenes. El empleo informal y el trabajo precario son dos características negativas de la estructura económica panameña. La mayoría de los panameños no tienen empleos fijos (y trabajan sin contratos ni seguro social) y, como consecuencia, sus familias se desintegran.

Segundo.— un plan social que garantice los servicios de salud, educación y vivienda a todos los panameños. Los panameños quieren programas de salud en el nivel de las comunidades y centros de salud para atender las enfermedades. El gobierno tiene recursos suficientes para lograr este objetivo, pero prefiere gastarlos en negocios con sus socios del sector privado. El pueblo también quiere escuelas, con educadores bien pagados, en las comunidades donde viven los estudiantes.

Tercero.— un plan de seguridad que ponga fin a la corrupción, que garantice la tranquilidad de las comunidades y que erradique las guerras territoriales sangrientas por el control de la distribución de drogas ilícitas.

Panamá, 27 de diciembre de 2012.